



Detrás del ‘plan de choque’, las firmas calificadoras

GPS económico

Aunque formalmente sea el gobierno del estado el que se asume como responsable del llamado “plan de choque” financiero, de acuerdo a diferentes especialistas consultados por GPS económico, son las muy cuestionadas internacionalmente, firmas calificadoras como Fitch, Moodys o Standard y Poors, las que están detrás de los aumentos de tarifas en el metro, en los prediales, el impuesto sobre la nómina o detrás de los recortes de personal que anunció el tesorero del estado Rodolfo Gómez.

Fue durante los últimos días de la semana pasada y principios de la actual, —explican estos especialistas —, cuando las firmas calificadoras intensificaron sus presiones blandiendo la amenaza de “bajar la calidad crediticia”, del gobierno del estado de “A-“ — donde se encuentra en la actualidad —, a “bbb-” que representaría un grado menor; lo cual obligaría al gobierno a pagar mas intereses por la deuda y su servicio .

Fitch encabezó las criticas a las finanzas del gobierno aduciendo que en este momento “el servicio de la deuda”, representa ya “un 50% de la ahorro interno”, y que por lo tanto, era inminente la baja en la calificación para la deuda estatal.

Según los especialistas entrevistados por GPS económico, las firmas calificadoras han sido acusadas en Europa por los gobiernos de algunos países como Italia o España, de propiciar alzas en las tasas de interés que tienen que pagar estos por los credititos que solicitan, al ser reducida su calificación.

De esa manera, las firmas calificadoras han sido acusadas de coludirse con los bancos y demás prestamistas que obtendrán, por cada baja en la calificación, mas de un punto de intereses por cada préstamo; además de encarecer el servicio de la deuda ya existente. La postura del gobernador Rodrigo Medina, reiterada este jueves en una entrevista concedida al diario nacional La Jornada, es de que; para hacerle frente a las necesidades crecientes de la población del estado —necesidades en materia de seguridad, de empleo o de infraestructura —, y frente a recursos y participaciones federales que son insuficientes, el gobierno tiene que recurrir a la deuda “como lo hacen las empresas y las industrias”.

Medina puso como ejemplo, la compra del periférico, una obra que por las altas tarifas que impone la empresa privada que la controlaba, estaba sub utilizada y con muy poco transito.

Al tomar el control el estado el aforo será de “mas de 20 mil trailers diarios”, que pagarán menos por su utilización y generarán ingreso para al estado y para hacerle frente a la deuda contraída para su reconstrucción. Sin embargo, para las calificadoras, las necesidades de la población de un estado o de una nación, así como los requerimientos de infraestructura básica etc, ni los recursos que estas obras podrían generar , en el futuro, para los gobiernos.

Las calificadoras tampoco toman en cuenta el papel de la banca comercial o de los mercados de capitales, en el encarecimiento de los créditos; que hace que las deudas de los estados se disparen, como tampoco las condiciones que estos acreedores les imponen a los gobiernos para hacer esos prestamos. Por esta razón, en algunos países las calificadoras han sido declaradas con nocivas para el interés nacional por realizar practicas en

confabulación con los acreedores de esas naciones,. En el caso de Nuevo León, es claro que también es así, concluyen nuestros entrevistados: Las calificadoras amenazaron con una reducción en la calificación para forzar al gobierno del estado a un “plan de choque”, que solo servirá para hacer “ahorros” que se destinaran al pago de la deuda y de todas formas no detendrá el aumento de los intereses.

Las medidas que contempla el Plan de Choque, según informó el tesorero del estado; además de una eventual creación del IVA estatal y un aumento de las tarifas del Metro, son las siguientes:

- >Ajuste de gasto de corto plazo.
- > No crear plazas nuevas ni aumentar sueldos en 14 meses.
- > Reducir personal.
- > Anular rentas.
- > Evitar gastos duplicados y eliminar autos con 10 años de antigüedad.
- > No otorgar fondos propios a programas nuevos de inversión.
- > Desaparición de dependencias y fusión de otras.
- > Con todo, estiman ahorros por \$530 millones.